

No. 43503¹

**Venezuela
and
Greece**

Agreement on social security between the Republic of Venezuela and the Hellenic Republic. Caracas, 24 April 1991

Entry into force: *1 January 1995 by notification, in accordance with article 34*

Authentic texts: *Greek and Spanish*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Venezuela, 2 January 2007*

**Venezuela
et
Grèce**

Convention de sécurité sociale entre la République du Venezuela et la République hellénique. Caracas, 24 avril 1991

Entrée en vigueur : *1er janvier 1995 par notification, conformément à l'article 34*

Textes authentiques : *grec et espagnol*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Venezuela, 2 janvier 2007*

¹ The authentic Greek is not reproduced for technical reasons – Le texte authentique grec n'est pas reproduit pour des raisons techniques.

[SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL]

**CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE
LA REPUBLICA DE VENEZUELA Y LA REPUBLICA HELENICA**

El Gobierno de la República de Venezuela y el Gobierno de la República Helénica,

- Deseando promover el bienestar de las personas que se trasladen entre los dos países o que trabajen en los respectivos territorios;

- Deseando garantizar que esas personas gocen de iguales derechos al amparo de las respectivas legislaciones de seguridad social o de seguro social;

- Decididos a asegurar a los trabajadores de cada uno de los dos países que ejerzan o hayan ejercido actividad en el otro país, la conservación de los derechos de seguridad social o de seguro social, adquiridos o en vías de adquisición;

Han acordado celebrar el siguiente Convenio:

CAPITULO I

Disposiciones Generales

ARTICULO 1

Definiciones

1. Los Términos que se enumeran a continuación tienen a efectos de la aplicación del presente Convenio el siguiente significado:

a) "Territorio". Se refiere.

i) Respecto de Grecia: al territorio de la República Helénica.

ii) Respecto de Venezuela: al territorio de la República de Venezuela.

b) "Legislación". Leyes, reglamentos y demás disposiciones citadas en el Artículo 2, vigentes en los territorios, de una u otra Parte Contratante.

c) "Autoridad Competente". Respecto de Grecia, el Ministerio de la Salud, Previsión y Seguridad Social, y el Ministerio de la Marina Mercante respecto de la Seguridad de los marinos mercantes. Respecto de Venezuela, el Ministerio del Trabajo.

d) "Institución". Organismo o autoridad responsable de la aplicación de la legislación a que se refiere el Artículo 2.

e) "Institución Competente". Institución que debe entender en cada caso concreto, de conformidad con la legislación aplicable.

f) "Organismos de Enlace". Organismo de coordinación entre entidades que intervengan en la aplicación del Convenio y de información a los interesados sobre derechos y obligaciones derivados del mismo.

g) "Trabajador". Toda persona que como consecuencia de realizar o haber realizado una actividad por cuenta propia o ajena está o ha estado sujeta a la legislación señalada en el Artículo 2.

h) "Familiares". Se refiere a las personas definidas o admitidas como tales, o designadas como miembros del grupo familiar en la legislación aplicable por la Institución competente encargada de la concesión de las prestaciones; pero, si esta legislación solamente considera como miembros del grupo familiar a las personas que viven con el asegurado bajo el mismo techo, tal condición a los efectos del presente Convenio, será considerada satisfecha en el caso que dichas personas estén principalmente a cargo del asegurado.

i) "Período de Seguro". Período de cotización o período asimilado considerado como tal por cada legislación.

j) "Prestaciones". Cualquier prestación en dinero prevista por las legislaciones mencionadas en el Artículo 2, incluido todo complemento, suplemento o revalorización.

2. Cualquier otro término o expresión no definidos en el presente Convenio, tendrá el significado que les fuere asignado en la legislación aplicable.

ARTICULO 2

Campo de aplicación por la materia

1. El presente Convenio se aplica a la legislación que regula:

a) En Venezuela:

El Régimen del Seguro Social en lo atinente a las prestaciones en caso de:

- a) Incapacidad temporal
 - b) Incapacidad parcial o invalidez
 - c) Vejez
 - d) Sobrevivientes
 - e) Asignación por defunción
- b) En Grecia:
- a) A la legislación del régimen general que cubran los trabajadores en relación de dependencia o asimilados.
 - b) A la legislación de los regímenes especiales de Seguros Sociales que cubren todas las categorías de trabajadores así como a personas que ejerzan una actividad independiente o una profesión liberal.
 - c) A la legislación que se refiere a los agricultores y marinos.

2. El presente Convenio no se aplica para Grecia la legislación especial que cubre pensiones de los empleados públicos.

3. El presente Convenio se aplica igualmente a las legislaciones que complementen o modifiquen las legislaciones enumeradas en el Párrafo 1 de dicho Artículo.

4. El presente Convenio se aplica igualmente a las legislaciones de las Partes Contratantes que extienden la aplicación de la legislación existente a nuevas categorías de trabajadores o que instituyan nuevas disposiciones de Seguridad Social, salvo que:

a) El Gobierno de la Parte Contratante que extienda su legislación o instituya nuevas disposiciones notifique al Gobierno de la otra Parte su voluntad de exceptuar esas disposiciones del campo de aplicación del presente Convenio, en un plazo de 3 meses a contar de la publicación oficial de tales disposiciones.

b) El Gobierno de la otra Parte Contratante notifique su posición al Gobierno de la primera Parte Contratante, en un plazo de 3 meses a contar desde la notificación oficial de la extensión o la institución.

5. De igual manera será aplicable a la legislación que complete o modifique las prestaciones o regímenes a que se refiere el numeral anterior.

ARTICULO 3

Campo de aplicación personal

1. Las disposiciones del presente Convenio se aplican a las personas que estén o hayan estado sujetas a la legislación de la Seguridad Social, o Seguro Social, de una u otra Parte

Contratante y, de igual manera, a sus familiares y sobrevivientes calificados.

2. Las personas que hayan estado sujetas a la legislación de la Seguridad Social, o Seguro Social, de una de las Partes Contratantes, y que se residencien en el territorio de la otra Parte, podrán inscribirse en el seguro del régimen facultativo de este país en las mismas condiciones que sus nacionales, para lo cual se tomarán en cuenta, si fuese necesario, los períodos de seguro cumplidos bajo la legislación de la primera Parte.

Si la legislación prevé un determinado plazo para solicitar la inscripción de este Seguro, el mismo comenzará a contarse a partir de la fecha de la última cotización efectuada en cualquiera de las Partes.

ARTICULO 4

Igualdad de trato

Los nacionales de una Parte Contratante disfrutarán de igualdad de trato respecto a los de la otra Parte en lo concerniente a los derechos y obligaciones derivados de las legislaciones expresadas en el Artículo 2.

ARTICULO 5

Legislación aplicable

Los trabajadores ocupados en el territorio de una de las Partes Contratantes estarán sujetos a la legislación de Seguridad Social de esa Parte.

ARTICULO 6

Legislación aplicable: excepciones

Se exceptúan de la aplicación del artículo anterior a los trabajadores siguientes:

a) El trabajador que preste servicios en el territorio de una de las Partes Contratantes para una entidad patronal con

Se debe en ella, y sea enviado a realizar un trabajo temporal en el territorio de la otra Parte, sigue sujeto a la legislación de la primera Parte, siempre que la duración del trabajo no exceda de 12 meses. En caso de que dicho trabajo se prolongue más allá de los 12 meses, debido a alguna causa imprevisible, las Autoridades Competentes de ambas Partes, de común acuerdo, podrán autorizar la prórroga de esta situación para un nuevo período de un año.

b) El personal de tripulación de las empresas de transporte aéreo y navegación o pesca marítima sigue sujeto a la legislación de la Parte Contratante en cuyo territorio se halla la sede o domicilio de la respectiva entidad patronal.

c) Los representantes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera se regirán por lo establecido en los Convenios de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, del 18 de abril de 1961 y sobre Relaciones Consulares, del 24 de abril de 1963.

d) Los funcionarios públicos de una Parte, no incluidos en la letra c) de este artículo, que sean destinados al territorio de la otra Parte, quedarán sometidos a la legislación de la Parte a la que pertenece la Administración de la cual dependen.

e) El personal administrativo y técnico de las Embajadas y Consulados, de una de las Partes Contratantes, al igual que los miembros de su personal de servicio, así como los trabajadores domésticos que estén colocados al servicio exclusivo de los representantes diplomáticos o funcionarios consulares de carrera, cuando sean nacionales del Estado Acreditante, podrán optar por la aplicación de la legislación de dicho Estado. Esta opción se ejercerá dentro de los tres primeros meses, a partir de la entrada en vigor del presente Convenio o, según el caso, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de iniciación del trabajo en el territorio de la Parte donde desarrollan su actividad.

f) Las Autoridades Competentes de las dos Partes Contratantes pueden prever, de común acuerdo, excepciones a las disposiciones de los Artículos 5 y 6 para determinados trabajadores o determinadas categorías de trabajadores.

ARTICULO 7

Prestaciones de residentes extranjeros

1. Las pensiones, subsidios, rentas e indemnizaciones adquiridas en virtud de la legislación de una Parte Contratante no estarán sujetas a reducción, modificación, suspensión o retención por el hecho de que el beneficiario resida en el territorio de la otra Parte.

2. Las prestaciones económicas debidas por una de las Partes

Contratantes, en aplicación del presente Convenio, se harán efectivas a los beneficiarios que residan en el territorio de la otra Parte o de un tercer país.

CAPITULO II

Prestaciones en dinero por enfermedad y maternidad

ARTICULO 8

Las prestaciones en dinero por enfermedad y maternidad estarán a cargo de la Institución Competente de la Parte cuya legislación sea aplicable al trabajador de acuerdo con los Artículos 5 y 6 de este Convenio.

Para la concesión de las mismas se tendrán en cuenta, si es necesario, la totalización de períodos de seguro en la forma establecida en el Artículo 9, párrafo 1.

CAPITULO III

Prestaciones de incapacidad parcial, invalidez, vejez y sobrevivientes

ARTICULO 9

Totalización

1. Para la adquisición, conservación y recuperación del derecho a las prestaciones reguladas en este Capítulo, cuando un trabajador haya estado sometido sucesiva o alternativamente a la legislación de las dos Partes Contratantes, los períodos de seguro cumplidos en virtud de la legislación de cada una de las Partes serán totalizados cuando sea necesario y siempre que no coincidan.

2. En caso de que el trabajador no tiene derecho a prestaciones conforme a las disposiciones del precedente párrafo 1, se tomen igualmente en cuenta los períodos de seguro cumplidos en un tercer país con el cual ambas Partes Contratantes han concluido separadamente Convenios Bilaterales o Multilaterales de Seguros Sociales, que prevén la totalización de los períodos de seguro cumplidos en estos Estados.

ARTICULO 10

Regulación de Prestaciones

El trabajador que halla estado sucesiva o alternativamente sometido a la legislación de una y otra Parte Contratante, causará derecho a las prestaciones reguladas en este Capítulo, en las condiciones siguientes:

1. Si se cumplen los requisitos exigidos por la legislación de una o de ambas Partes Contratantes para causar derecho a las prestaciones, la Institución o las Instituciones Competentes aplicarán su propia legislación interna teniendo en cuenta únicamente los períodos de seguro cumplidos bajo dicha legislación.

2. Si no se cumplen los requisitos exigidos por la legislación de una o ambas Partes Contratantes para causar derecho a las prestaciones, la Institución o las Instituciones Competentes totalizarán con los propios, los períodos de seguro cumplidos bajo la legislación de la otra Parte.

ARTICULO 11

Calificación de períodos de seguro

A los fines de la totalización prevista en el Artículo:

a) En el caso de que un período de seguro cumplido en un régimen obligatorio de una Parte se superponga con un período de seguro cumplido en un régimen voluntario de la otra Parte, únicamente será considerado el cumplido en un régimen obligatorio.

b) En el caso de que un mismo período fuere simultáneamente considerado como un período equivalente en la legislación de los dos países, únicamente será considerado por la Parte en la cual el asegurado haya cumplido un período obligatorio en último lugar, antes del período en cuestión; cuando el asegurado no haya cumplido períodos obligatorios anteriores en ninguna de las Partes, el período equivalente será considerado por la Parte en la cual haya cumplido posteriormente, por primera vez, un período obligatorio.

c) Los períodos de seguro cumplidos en una de las Partes, bajo un régimen en relación al cual no se aplica el presente Convenio, pero que son tomadas en cuenta para un régimen de esa Parte en relación al cual se aplica dicho Convenio, deben ser considerados como períodos de seguro para efectos de la totalización por la otra Parte.

ARTICULO 12

Períodos de seguro en régimen especial

Cuando la legislación de una de las Partes Contratantes haga depender la concesión de las prestaciones, de la condición de que los períodos de seguro hayan sido cumplidos en una profesión sujeta a un régimen especial, los períodos cumplidos bajo la legislación de la otra Parte únicamente serán tomados en cuenta para la concesión de esas prestaciones, si dichos períodos han sido cumplidos bajo un régimen correspondiente o, en su defecto, en la misma profesión. En el caso que el asegurado no llene las condiciones exigidas para beneficiarse de las referidas prestaciones, aún totalizando los períodos así cumplidos bajo las legislaciones de ambos países, esos períodos serán tomados en cuenta para la concesión de las prestaciones del régimen general.

ARTICULO 13

Condiciones más favorables

Si la legislación de una Parte Contratante establece condiciones más favorables para conceder prestaciones al trabajador que haya ejercido una actividad en medios insalubres o capaces de producir una vejez prematura, la Institución de dicha Parte tendrá en cuenta los períodos de Seguro acreditados en la otra Parte durante el ejercicio de esa misma actividad y con los riesgos indicados.

ARTICULO 14

Períodos de seguro inferiores a un año

Si la duración total de los períodos de seguro cumplidos bajo la legislación de una Parte Contratante no llega a un año y si, teniendo en cuenta únicamente estos períodos no se adquiere ningún derecho según su legislación, no estará obligada esta Parte a conceder prestaciones en razón de dichos períodos. Sin embargo, estos períodos serán tomados en consideración por la Institución de la otra Parte para la adquisición del derecho a la pensión cuando se aplique el Artículo 10, aparte 2.

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando existan períodos de seguro inferiores a un año, cumplidos bajo la legislación de ambas Partes, estos deberán totalizarse de acuerdo con el Artículo 10, aparte 2, si con dicha totalización se adquiere derecho a prestaciones bajo la legislación de una o de ambas Partes.

ARTICULO 15

Liquidación de prestaciones

1. La Parte Contratante que haya procedido a la totalización de los períodos de seguro, procederá a la liquidación de las prestaciones a las cuales el interesado tenga derecho, bajo la respectiva legislación, de la siguiente forma:

a) Calculará previamente el monto teórico de la prestación a la que el interesado tendría derecho en el caso de que todos los períodos de seguro hubiesen sido cumplidos exclusivamente bajo la legislación aplicable por ella;

b) Fijará seguidamente, la prestación a cancelar al interesado, deduciéndola del monto teórico calculado según se indica en el literal a), en la proporción de la duración de los períodos de seguro cumplidos bajo su propia legislación, relacionada con la duración total de los períodos de seguro cumplidos bajo la legislación de ambas Partes.

2. Cuando en virtud de la legislación de una de las Partes Contratantes el cálculo de las prestaciones deba ser efectuado con base en el salario promedio de todo o parte del período de seguro, dicho salario promedio será determinado de acuerdo a los salarios pagados durante el período de seguro cumplido bajo la legislación de la referida Parte.

3. Si la suma de las prestaciones a conceder por las Instituciones de las Partes Contratantes es inferior al monto mínimo vigente en la Parte donde el interesado resida, la diferencia será soportada por la Institución de esa última Parte.

ARTICULO 16

Cálculo de prestaciones

1. Para determinar la base de cálculo o reguladora de la prestación, cada Institución Competente aplicará su legislación.

2. Cuando todo o parte del período de cotización que ha de tomarse para el cálculo de la base reguladora de prestaciones

se hubiera cumplido en Grecia, la Institución Competente de Venezuela determinará la pensión considerando que en dicho período las cotizaciones han sido efectuadas a razón del salario mínimo existente en Venezuela, siempre y cuando este salario mínimo sea inferior al salario máximo de cotización.

CAPITULO IV

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

ARTICULO 17

Legislación aplicable

1. El derecho a las prestaciones derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional será determinado por la legislación de la Parte Contratante a la que el trabajador se hallare sometido en la fecha de producirse el accidente o declararse la enfermedad, a menos que la enfermedad haya sido contraída en la otra Parte, en cuyo caso la prestación estará a cargo de esta, de acuerdo con su legislación.

2. Si la persona no alcanzara derecho a prestaciones de enfermedad profesional al amparo de la legislación de la Parte que indica el párrafo anterior, sus derechos serán examinados por la otra Parte de acuerdo con su legislación, siempre que hubiese ejercido una actividad susceptible de provocar dicha enfermedad bajo la legislación de esta última Parte.

3. Cuando la legislación de una de las Partes subordine la concesión de las prestaciones de enfermedad profesional a la condición de que la enfermedad considerada haya sido comprobada por primera vez en su territorio, esta condición se considerará cumplida cuando la enfermedad haya sido comprobada por primera vez en el territorio de la otra Parte.

ARTICULO 18

Evaluación de accidentes anteriores

En el supuesto de que un trabajador hubiere sufrido un accidente de trabajo, o una enfermedad profesional, respecto de las cuales se aplicará la legislación de una de las Partes

Contratantes y posteriormente sufre otro accidente de trabajo o enfermedad profesional respecto de las cuales ha de aplicarse la legislación de la otra Parte Contratante, la Institución Competente de esta última Parte, a los efectos de determinar el grado de incapacidad de dicho trabajador, tendrá en cuenta el primer infortunio como si hubiera ocurrido bajo su legislación pero sólo asumirá el pago correspondiente a la incapacidad derivada del segundo infortunio.

ARTICULO 19

Agravación de la enfermedad

En caso de agravación de una enfermedad profesional que haya dado lugar a pensión según la legislación de una de las dos Partes Contratantes, cuando el beneficiario reside en el territorio de la otra Parte, serán aplicables las siguientes reglas:

A) Si el trabajador no ha ejercido en lugar de su nueva residencia una actividad susceptible de agravar esta enfermedad profesional, la Institución de la primera Parte tomará a su cargo la agravación de la enfermedad en los términos de su propia legislación.

B) Si el trabajador ha ejercido en el lugar de su nueva residencia una actividad susceptible de agravar esta enfermedad profesional:

a) La Institución de la primera Parte conservará a su cargo la prestación debida al trabajador en virtud de su propia legislación, como si la enfermedad no hubiera sufrido agravación.

b) La Institución de la otra Parte donde el trabajador ha realizado en último lugar esa actividad tomará a su cargo la prestación correspondiente a la agravación. El importe de esta prestación se determinará de acuerdo con la legislación de esta última Parte como si la enfermedad se hubiera producido en su territorio y será igual a la diferencia entre el importe de la prestación debida al trabajador después de producirse la agravación y el que le hubiere correspondido antes de producirse dicha agravación.

CAPITULO V

Subsidio funerario o asignación por defunción

ARTICULO 20

Legislación aplicable. Totalización

1. Los subsidios funerarios o asignaciones por defunción se regirán por la legislación que fuere aplicable al trabajador en la fecha del fallecimiento.

El reconocimiento y cálculo de la prestación se realizará totalizando, si fuera necesario, los períodos de seguro cumplidos por el causante de la prestación bajo la legislación de la otra Parte, de acuerdo con el Artículo 9, párrafo 1.

2. En los casos de fallecimiento de un pensionado que lo fuera de ambas Partes Contratantes, el reconocimiento de la prestación se regulará por la legislación de la Parte en cuyo territorio residiera el pensionado en el momento de su fallecimiento.

3. Si el fallecimiento del pensionado tuviera lugar en un tercer país, la legislación aplicable, en el caso de que tuviera derecho a la prestación en ambas Partes Contratantes, será la de la Parte donde figuró asegurado por última vez el trabajador.

CAPITULO VI

Disposiciones diversas

ARTICULO 21

Condiciones

Cuando según la legislación de una de las Partes Contratantes, el disfrute de una prestación de la Seguridad Social o Seguro Social, la obtención de ingresos de otra naturaleza, o la realización de una actividad lucrativa, produzcan efectos jurídicos sobre el derecho a una prestación, o sobre la afiliación al Sistema de la Seguridad Social, o Seguro Social, estas situaciones tendrán efectos jurídicos aunque se produzcan o se hayan producido en el territorio de la otra Parte.

ARTICULO 22

Revalorización de prestaciones

Las prestaciones reconocidas por aplicación de las normas del Capítulo III, se revalorizarán con la misma periodicidad y en idéntica cuantía que las previstas en la respectiva legislación interna.

Sin embargo, cuando la cuantía de una pensión haya sido determinada bajo el régimen de prorrata previsto en el párrafo 1 del Artículo 15, el importe de la revalorización se efectuará mediante la aplicación de la misma regla de proporcionalidad citada en el mencionado aparte y artículo.

ARTICULO 23

Trámite de documentos

Las peticiones, declaraciones o recursos que deban presentarse, en determinado plazo, a las Autoridades Competentes e Instituciones de una Parte Contratante, tienen la misma validez cuando se presenten dentro del mismo plazo a las Autoridades Competentes e Instituciones de la otra Parte.

En el Acuerdo Administrativo a que se refiere el Artículo 27 se establecerán normas para la tramitación de los documentos.

ARTICULO 24

Beneficios de derechos, legalización y traducción de documentos

1. Los beneficiarios de exenciones o reducciones de tasas, timbre, derechos de secretaría o de registro u otros análogos previstos en la legislación de una de las Partes Contratantes para los certificados y documentos que se expidan en aplicación de la legislación de la otra Parte, o del presente Convenio.

2. Todos los actos administrativos y documentos que se expidan en aplicación del presente Convenio, serán dispensados de los requisitos de legalización o visado, pero serán traducidos por intérpretes públicos cuando cualquiera de las Partes lo considere necesario.

ARTICULO 25

Pago de prestaciones en moneda nacional

Las Instituciones deudoras de prestaciones quedarán válidamente liberadas cuando efectúen el pago en la moneda de su país.

ARTICULO 26

Buenos oficios y colaboración

Las Autoridades Competentes e Instituciones de ambas Partes se prestarán sus buenos oficios y la más amplia colaboración técnica y administrativa para la aplicación del presente Convenio dentro del marco de su propia legislación.

ARTICULO 27

Acuerdos Administrativos

Las Autoridades Competentes e Instituciones de ambas Partes elaborarán conjuntamente Acuerdos Administrativos para la aplicación y ejecución del presente Convenio.

ARTICULO 28

Medidas para el cumplimiento del Convenio

Las Autoridades Competentes de las dos Partes se comprometen a tomar las siguientes medidas para el debido cumplimiento del presente Convenio:

- a) Designar a los Organismos de Enlace.
- b) Comunicar las medidas adoptadas internamente para la aplicación de este Convenio.
- c) Notificarse todas las disposiciones legislativas y reglamentarias que modifiquen las que se mencionan el Artículo 2.

ARTICULO 29

Comunicación directa

Para la debida aplicación y cumplimiento de este Convenio, las Autoridades Competentes, Organismos de Enlace e Instituciones de las dos Partes, se comunicarán directamente entre sí.

ARTICULO 30

Solución de controversias

Las diferencias que puedan surgir en la interpretación y aplicación del presente Convenio se resolverán en la medida de lo posible por las Autoridades Competentes de ambas Partes. Las controversias que subsistan serán resueltas por la vía diplomática.

CAPITULO VII

Disposiciones transitorias y finales

ARTICULO 31

Períodos y contingencias anteriores

1. Los períodos de seguro cumplidos según la legislación de las Partes Contratantes antes de la fecha de vigencia del presente Convenio, serán tomados en consideración para la determinación del derecho a las prestaciones que se reconozcan en virtud del mismo. No obstante, la Institución de Venezuela no computará períodos de seguro anteriores al 1ero. de enero de 1967.

2. La aplicación del presente Convenio otorgará derecho a prestaciones por contingencias acaecidas con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor. Sin embargo, el pago de las mismas no se hará con efecto retroactivo a dicha fecha.

ARTICULO 32

Coincidencia de períodos anteriores

No obstante lo dispuesto en el Capítulo III del presente Convenio, si coincidiesen períodos de seguro en ambas Partes Contratantes, efectuados antes de la entrada en vigor del Convenio, cada una de las Partes tomará en consideración los períodos cotizados según su legislación a efectos de la aplicación del Artículo 10.

ARTICULO 33

Revisión de solicitudes anteriores

1. Las solicitudes de prestaciones que hayan sido examinadas por cada una de las Partes antes de la entrada en vigor del Convenio podrán ser revisadas a petición de los interesados con arreglo a lo dispuesto en el mismo.

2. Cuando una prestación o una solicitud de prestación hubiese sido suspendido en su aplicación o rechazado si fuera el caso por razones de nacionalización de lugar de residencia o por cualquier incumplimiento de los requisitos establecidos por las legislaciones internas de ambas Partes Contratantes, el interesado tendrá derecho a solicitar una reconsideración de su caso y en cada oportunidad se decidirá la procedencia o no de la solicitud de reconsideración.

3. En los casos que se refieren a los párrafos 1 y 2 del presente Artículo, las prestaciones serán otorgadas a partir de la fecha de la presentación de la solicitud. Pero en el caso que la solicitud sea presentada en un plazo de 1 año a partir de la fecha de entrada en vigor del Convenio las prestaciones se otorgarán a partir de esta fecha.

ARTICULO 34

Entrada en vigor

El presente Convenio estará sujeto al cumplimiento de los requisitos constitucionales de cada una de las Partes, para su entrada en vigor. A tal efecto cada una de ellas comunicará a la otra el cumplimiento de sus propios requisitos.

El Convenio entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a la fecha de la última comunicación.

ARTICULO 35

Duración

1. El presente Convenio se establece por un año a partir de la fecha de su entrada en vigor y se prorrogará automáticamente de año en año, salvo denuncia que deberá ser notificada seis meses antes de la expiración del plazo.

2. En el supuesto de cesar la vigencia del Convenio, las disposiciones del mismo se seguirán aplicando a los derechos adquiridos bajo su amparo.

Igualmente, en este caso, las Partes Contratantes acordarán las disposiciones que garanticen los derechos en vías de adquisición derivados de los períodos de seguro cumplidos con anterioridad a la fecha de terminación del Convenio.

En fe de lo cual, los abajo firmantes en uso de sus plenas atribuciones, firman el presente. Hecho en la ciudad de Caracas, a los veinticuatro días del mes abril de mil novecientos noventa y uno, en dos ejemplares igualmente auténticos, cada uno de ellos, en castellano y griego.

Por el Gobierno de la
República de Venezuela



GERMAN LAIRET URGUELLES
Ministro del Trabajo

Por el Gobierno de la
República Helénica



CHARALAMBOS PAPADOPOULOS
Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario

[TRANSLATION – TRADUCTION]

CONVENTION ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE REPUBLIC OF VENEZUELA AND THE HELLENIC REPUBLIC

The Government of the Republic of Venezuela and the Government of the Hellenic Republic,

– Wishing to promote the well-being of persons travelling between the two countries or working in the respective territories,

– Wishing to ensure that these persons enjoy equal rights under the respective social security legislations,

– Resolved to guarantee to the workers of either country who exercise or have exercised an activity in the other country the preservation of the social security rights that they have acquired or are in the process of acquiring,

Have agreed to conclude the following Convention:

CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS

Article 1. Definitions

1. For the purposes of this Convention, the terms listed below shall have the following meanings:

- a. "Territory" means:
 - i. In the case of Greece, the territory of the Hellenic Republic.
 - ii. In the case of Venezuela, the territory of the Republic of Venezuela.
- b. "Legislation" means the laws, regulations and other provisions specified in article 2, which are in force in the territory of either Contracting Party.
- c. "Competent authority" means, in relation to Greece, the Ministry of Health, Welfare and Social Security and the Ministry of Merchant Marine, in respect of merchant seamen's security; and, in relation to Venezuela, the Ministry of Labour.
- d. "Institution" means the body or authority responsible for the implementation of the legislation referred to in article 2.
- e. "Competent institution" means the institution having jurisdiction in each specific case under the applicable legislation.
- f. "Liaison body" means the body responsible for coordination between institutions involved in the implementation of the Convention and for the provision of information to the persons concerned regarding rights and obligations under the Convention.

- g. "Worker" means any person who, as a result of exercising or having exercised an activity for his or her own account or for the account of a third party, is or has been subject to the legislation referred to in article 2.
- h. "Family members" means the persons defined or accepted as such or defined as members of the family group under the legislation applicable by the competent institution responsible for granting the benefits. If, however, under that legislation, only persons living under the same roof with the insured individual are regarded as members of the family group, then, for the purposes of this Convention, that prerequisite shall be considered as satisfied in the event that the persons in question are mainly provided for by that individual.
- i. "Insurance period" means a contribution period or a period equivalent to such a period.
- j. "Benefits" means any cash benefits provided for in the legislations referred to in article 2, including any complementary or supplementary amount or any adjustment.

2. Any other term or expression not defined in this Convention shall have the meaning assigned to it in the pertinent legislation.

Article 2. Substantive scope

1. This Convention shall apply to the legislation governing:

a. In Venezuela:

The social security scheme with regard to benefits in the event of:

- a. Temporary incapacity
- b. Partial incapacity or disability
- c. Old age
- d. Survivors
- e. Death.

b. In Greece:

- a. The general social security scheme covering wage workers and persons treated as such.
- b. Special social security schemes covering all categories of salaried workers as well as persons who are self-employed or engage in a liberal profession.
- c. The social security scheme for farmers and merchant seamen.

2. In the case of Greece, this Convention shall not apply to the special legislation covering the pensions of civil servants.

3. This Convention shall also apply to legal provisions supplementing or amending those referred to in paragraph 1 of this article.

4. This Convention shall also apply to legal provisions of the Contracting Parties that extend the application of existing legislation to new categories of workers or institute new social security provisions, unless:

- a. The Government of the Contracting Party extending its legislation or instituting new provisions advises the Government of the other Party of its desire to exempt those provisions from the sphere of application of this Convention, within three months after the official publication of the said provisions.
 - b. The Government of the Contracting Party advises the Government of the first Party of its objection to the extension or institution, within three months after the official notification.
5. Similarly, this Convention shall apply to legislation supplementing or modifying the benefits or schemes referred to in the earlier paragraph.

Article 3. Personal scope

1. The provisions of this Convention shall apply to persons who are or have been subject to the social security legislation, or social welfare, of either Contracting Party and to their family members and eligible survivors.

2. Persons having been subject to the social security legislation, or social welfare, of either Contracting Party and residing in the territory of the other Party may register with the optional social security scheme of that country on the same terms as its citizens, whereby, if necessary, account shall be taken of the insurance periods completed in accordance with the legislation of the first Party.

If the legislation fixes a specific time limit for applying for registration with that social security scheme, that period shall start after the date of the latest contribution paid in either Party.

Article 4. Equal treatment

Nationals of either Contracting Party shall receive the same treatment as those of the other Party with respect to the rights and obligations derived from the legislation referred to in article 2.

Article 5. Applicable legislation

Workers employed in the territory of either Contracting Party shall be subject to the social security legislation of that Party.

Article 6. Applicable legislation: Exemptions

Workers shall be exempted from the provisions of the preceding article as follows:

- a. A worker who is employed in the territory of either Contracting Party by an entity having its head office in that territory and is sent to work temporarily in the territory of the other Party shall continue to be subject to the legislation of the first Party, provided that the duration of that work does not exceed 12 months. In the event that, for any unforeseen reason, the work in question lasts longer

- than 12 months, the competent authorities of both Contracting Parties may, by mutual agreement, approve the extension of that situation for one more year.
- b. Crew members of air and sea transport or sea fishing companies shall continue to be subject to the legislation of the Contracting Party, in whose territory the head office of the respective company is located.
 - c. Diplomatic representatives and the career consular officials shall be governed by the provisions of the Vienna Convention on diplomatic relations of 18 April 1961 and the Vienna Convention on consular relations of 24 April 1963.
 - d. Civil servants of either Party who are not included in paragraph c of this article shall be subject to the legislation of the Party to which their employing administration belongs.
 - e. Administrative and technical staff of embassies and consulates of either Contracting Party, members of their service personnel and domestic workers assigned to the exclusive service of diplomatic representatives or career consular officials may, if they are nationals of the accrediting State, choose to be subject to the legislation of that State. That option shall be exercised within the first three months after the entry into force of this Convention or, where applicable, within three months after the date on which they began working in the territory of the Party in which they are employed.
 - f. The competent authorities of both Contracting Parties may, by mutual agreement, exempt certain workers or categories of workers from the provisions of articles 5 and 6.

Article 7. Benefits to foreign residents

1. Pensions, allowances, annuities and compensation received by virtue of the legislation of either Contracting Party shall not be reduced, modified, suspended or withheld on the ground that the beneficiary resides in the territory of the other Party.

2. Financial benefits payable under this Convention by either Contracting Party shall be paid to beneficiaries residing in the territory of the other Party or in a third country.

CHAPTER II. CASH BENEFITS FOR SICKNESS AND MATERNITY

Article 8

Cash benefits for sickness and maternity shall be paid by the competent institution of the Party whose legislation applies to the worker under articles 5 and 6 of this Convention.

In granting such benefits, the aggregate insurance periods, calculated as established in article 9, paragraph 1, shall be taken into account if necessary.

CHAPTER III. BENEFITS FOR PARTIAL INCAPACITY, DISABILITY, OLD AGE AND SURVIVORS

Article 9. Aggregation

1. For the purposes of acquisition, maintenance or recovery of entitlement to the benefits governed by this chapter, where a worker has been successively or alternately subject to the legislation of both Contracting Parties, the insurance periods completed under the legislation of each of the Parties shall be aggregated if necessary, provided that they do not overlap.

2. If a worker is not entitled to benefits under the provisions of paragraph 1 above, the insurance periods completed in third States with which both Contracting Parties have separately concluded bilateral or multilateral social security Conventions providing for the aggregation of insurance periods completed in those States shall also be taken into account.

Article 10. Regulation of benefits

A worker who has been successively or alternately subject to the legislation of both Contracting Parties shall be entitled to the benefits regulated in this chapter under the following conditions:

1. If the requirements for entitlement to the benefits laid down by the legislation of one or both of the Contracting Parties are met, the competent institution or institutions shall apply their own national legislation, taking into account only the insurance periods completed under that legislation.
2. If the requirements for entitlement to the benefits laid down by the legislation of one or both of the Contracting Parties are not met, the competent institution or institutions shall aggregate the insurance periods completed under the legislation of the other Party with its or their own.

Article 11. Characterization of insurance periods

For the purposes of the aggregation provided for in article 10:

- a. If an insurance period completed under a compulsory scheme of either Party overlaps with an insurance period completed under a voluntary regime of the other Party, only the insurance period completed under a compulsory regime shall be taken into account.
- b. If one and the same period is simultaneously regarded as an equivalent period under the legislation of both countries, that period shall be taken into account only by the Party in which the insured individual last completed a compulsory insurance period before the period in question. Where the insured person has not completed any prior compulsory insurance periods in any of the Parties, the equivalent period shall be taken into account by the Party in which that individual completed, later and for the first time, a compulsory insurance period.

- c. Insurance periods completed in one of the Parties under a regime to which this Convention does not apply but which are taken into account under a regime of that Party to which this Convention applies shall be regarded as insurance periods for purposes of aggregation by the other Party.

Article 12. Insurance periods under a special regime

Where, under the legislation of one Contracting Party, the granting of benefits is contingent on the completion of insurance periods in an occupation subject to a special scheme, the periods completed under the legislation of the other Party shall be taken into account for the granting of those benefits, only if those periods were completed under an analogous regime or, failing that, in the same profession. If the insured individual does not meet the requirements for receiving such benefits even after aggregating the periods thus completed under the legislations of both countries, those periods shall be taken into account for the granting of benefits under the general regime.

Article 13. More favourable conditions

If the legislation of a Contracting Party establishes more favourable conditions for granting benefits to a worker who has exercised an activity in an unhealthy environment or an environment which may cause premature ageing, the institution of that Party shall take into account the insurance periods credited in the other Party during which the same activity was exercised with the said risks.

Article 14. Insurance periods of less than a year

1. If the total duration of the insurance periods completed under the legislation of either Contracting Party comes to less than one year and if, on the basis of those periods alone, no entitlement to benefits exists under its legislation, that Party shall not be required to grant benefits by reason of the said periods. However, when applying article 10, paragraph 2, the institution of the other Party shall take these periods into account.

2. The preceding paragraph notwithstanding, when insurance periods of less than one year have been completed under the legislation of both Parties, those periods must be aggregated in accordance with article 11, paragraph 2, if such aggregation would result in entitlement to benefits under the legislation of one or both Parties.

Article 15. Determination of the amount of benefits

1. After aggregating insurance periods, a Contracting Party shall determine in the following manner the benefits to which the person concerned is entitled under the respective legislation:

- a. First, it shall calculate the theoretical amount of the benefit, to which the person concerned would be entitled, if all insurance periods had been completed solely under the legislation applicable to that Party.
- b. Subsequently, it shall deduce the benefit payable to the person concerned from the theoretical amount calculated as indicated under paragraph 1.a by

applying to that amount the ratio of the duration of the insurance periods completed under its own legislation to the total duration of the insurance periods completed under the legislations of both Parties.

2. Where, under the legislation of one of the Contracting Parties, the benefits must be calculated on the basis of the average salary over all or part of the insurance periods, that average salary shall be determined in accordance with the salaries paid during the insurance periods completed under the legislation of that Party.

3. Where the sum of the benefits to be granted by the institutions of the Contracting Parties is less than the minimum amount in effect in the Party where the person concerned resides, the difference shall be borne by the institution of that Party.

Article 16. Calculation of benefits

1. In determining the base for calculating or adjusting the benefit, each competent institution shall apply its legislation.

2. Where all or part of the contribution period to be used in calculating the base for adjusting benefits was completed in Greece, the competent Venezuelan institution shall determine the pension assuming that contributions during that period were made as a function of the minimum wage existing in Venezuela, as long as that minimum wage is less than the maximum wage that is used as a base for contributions.

CHAPTER IV. INDUSTRIAL ACCIDENTS AND OCCUPATIONAL DISEASES

Article 17. Applicable legislation

1. Entitlement to benefits for an industrial accident or occupational disease shall be determined by the legislation of the Contracting Party to which the worker was subject on the date of the accident or the onset of the disease, unless the disease was contracted in the other Party, in which case the benefit shall be paid by the latter, in accordance with its legislation.

2. If the person is not entitled to occupational disease benefits under the legislation of the Party indicated in the preceding paragraph, his or her entitlements shall be evaluated by the other Party in accordance with its legislation, provided that the person in question has exercised an activity which might cause the said disease under the legislation of the latter Party.

3. When the legislation of one of the Parties makes granting occupational disease benefits conditional on the disease having been first confirmed in its territory, that condition shall be considered as having been fulfilled if the disease was first confirmed in the territory of the other Party.

Article 18. Evaluation of prior accidents

In the event that a worker who has been injured in an industrial accident or has contracted an occupational disease, to which the legislation of either Contracting Party was

applied, subsequently is injured in another industrial accident or contracts another occupational disease to which the legislation of the other Contracting Party applies, the competent institution of the latter Party, in determining the degree of incapacity of that worker in accordance with its legislation, shall take into account the first mishap as if it had taken place under its own legislation but shall make only the payment corresponding to the incapacity resulting from the second mishap.

Article 19. Aggravation of disease

If an occupational disease having given rise to a pension under the legislation of either Contracting Party becomes worse while the beneficiary resides in the territory of the other Party, the following rules shall apply:

- A. If the worker has not exercised, at his or her new place of residence, an activity which might aggravate that occupational disease, the institution of the first Party shall cover the worsening of the disease under the terms of its own legislation.
- B. If the worker has exercised, at his or her new place of residence, an activity which might aggravate that occupational disease:
 - a. The institution of the first Party shall continue to pay the benefit owed to the worker under its own legislation, as if the disease had not become worse.
 - b. The institution of the other Party, in which the worker last exercised this activity, shall pay the benefit corresponding to the aggravation. The amount of that benefit shall be determined in accordance with the legislation of this latter Party as if the disease had occurred in its territory, and shall be equal to the difference between the amount of the benefit owed to the worker after the aggravation and that which it would have owed before the said aggravation.

CHAPTER V. FUNERAL ALLOWANCE OR DEATH BENEFIT

Article 20. Applicable legislation. Aggregation

1. Funeral allowances or death benefits shall be governed by the legislation that applied to the worker at the time of death.

Benefits shall be approved and calculated by aggregating, if necessary, the insurance periods completed by the originator of the benefit under the legislation of the other Party, in accordance with article 9, paragraph 1.

2. In the event of the death of a pensioner who is receiving a pension from both Contracting Parties, approval of the death benefit shall be governed by the legislation of the Party in whose territory the pensioner resided at the time of death.

3. If the pensioner's death occurred in a third country, the applicable legislation, in the event that the pensioner was entitled to the benefit in both Contracting Parties, shall be that of the Party in which the worker was last insured.

CHAPTER VI. MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 21. Conditions

When, under the legislation of either Contracting Party, the enjoyment of a social security or social welfare benefit, the receipt of income of another kind or the exercise of a gainful activity has a legal impact on entitlement to a benefit or on participation in the social security system or in social welfare, those situations shall have a legal impact even when they occur or have occurred in the territory of the other Party.

Article 22. Readjustment of benefits

Benefits approved under the rules in chapter III shall be adjusted at the same intervals and in the same amounts as those specified in the respective national legislation.

However, when the amount of a pension has been determined using the pro rata method provided for in article 15, paragraph 1, the amount of the adjustment shall be determined by applying the same rule of proportionality cited in that article and paragraph.

Article 23. Processing of documents

The claims, notices or appeals which must be submitted within a prescribed period to the competent authorities or institutions of either Contracting Party shall have the same validity, if they have been submitted to the competent authorities or institutions of the other Party within the same period.

The administrative agreement referred to in article 27 shall establish rules for the processing of documents.

Article 24. Benefits with respect to fees and the legalization and translation of documents

1. The benefits of exemptions or reductions with respect to taxes, stamp duties, administrative or registration fees or other similar payments provided for in the legislation of either Contracting Party for certificates and documents issued pursuant to the legislation of that Party shall be extended to documents and certificates issued pursuant to the legislation of the other Party or to this Convention.

2. All administrative certificates and documents issued under this Convention shall be exempt from legalization or visa requirements but shall be translated by official translators when either Party considers that to be necessary.

Article 25. Payment of benefits in a national currency

An institution's benefit obligations shall be considered to have been validly discharged when paid in the currency of its country.

Article 26. Good offices and cooperation

The competent authorities and institutions of both Parties shall offer each other their good offices and the broadest technical and administrative cooperation for the implementation of this Convention within the framework of their own legislation.

Article 27. Administrative agreements

The competent authorities and institutions of both Parties shall jointly draw up administrative agreements for the implementation and enforcement of this Convention.

Article 28. Measures for the implementation of the Convention

In order to ensure due implementation of this Convention, the competent authorities of the two Parties agree to take the following measures:

- a. Designate the liaison bodies.
- b. Notify each other of the measures adopted internally for the implementation of this Convention.
- c. Notify each other of any legislative or regulatory provisions amending those listed in article 2.

Article 29. Direct communication

For the due implementation and enforcement of this Convention, the competent authorities, liaison bodies and institutions of the two Parties shall communicate directly with one another.

Article 30. Settlement of disputes

Any disagreements concerning the interpretation and implementation of this Convention shall be resolved, as far as possible, by the competent authorities of the two Parties. Any disputes that remain shall be settled through diplomatic channels.

CHAPTER VII. TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

Article 31. Prior periods and contingencies

1. Insurance periods completed under the legislation of the Contracting Parties prior to the date of entry into force of this Convention shall be taken into consideration in determining entitlement to the benefits recognized hereunder. However, the institution of Venezuela shall not recognize insurance periods prior to 1 January 1967.

2. Application of this Convention shall give entitlement to benefits for contingencies which occurred before the Convention entered into force. However, payment of such benefits shall not be retroactive to that date.

Article 32. Coincidence of prior periods

Chapter III of this Convention notwithstanding, if insurance periods completed in both Parties prior to the entry into force of this Convention coincide, each of the Parties shall take the periods completed under its legislation into consideration for the purposes of applying article 10.

Article 33. Review of prior claims

1. Benefit claims evaluated by each of the Parties prior to the entry into force of the Convention may be reviewed in the light of its provisions at the request of the persons concerned.

2. Where the implementation of a benefit or a claim for a benefit has been suspended or, where applicable, a benefit or claim has been rejected by reason of nationality or residence or because the conditions required under the domestic legislations of both Contracting Parties were in some way not met, the person concerned may request a re-examination of the matter and, in each case, a decision will be made as to the merits of the request.

3. In the cases referred to in paragraphs 1 and 2 of this article, benefits shall be granted from the date of submission of the request. However, if the request is submitted within a year after the date of entry into force of the Convention, the benefits shall be granted from that date.

Article 34. Entry into force

This Convention shall be subject to completion by each Party of the procedures required by its Constitution for the entry into force of the Convention. To that purpose, each Party shall notify the other of the completion of its own procedures.

The Convention shall enter into force on the first day of the second month following the last notification.

Article 35. Period of validity

1. This Convention is established for one year from the date of its entry into force and it shall be automatically renewed from year to year unless notice of termination is given six months prior to the expiry of any such period.

2. In the event of termination of the Convention, its provisions shall continue to apply to the rights acquired thereunder.

Furthermore, in such event, the Contracting Parties shall agree on arrangements to guarantee any rights in the process of being acquired on the basis of insurance periods completed prior to the date of termination of the Convention.

In witness whereof, the undersigned, in exercise of their plenipotentiary powers, have signed this Convention.

Done in duplicate, at Caracas, on 24 April 1991, in the Spanish and Greek languages, both texts being equally authentic.

For the Government of the Republic of Venezuela:

GERMAN LAIRET URGUELLES
Minister of Labour

For the Government of the Hellenic Republic:

CHARALAMBOS PAPADOPOULOS
Ambassador extraordinary and plenipotentiary

[TRANSLATION – TRADUCTION]

CONVENTION DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU VENEZUELA ET LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE

Le Gouvernement de la République du Venezuela et le Gouvernement de la République hellénique,

Désireux de promouvoir le bien-être des personnes qui se déplacent entre les deux pays ou qui travaillent sur leur territoire respectif;

Souhaitant garantir que ces personnes jouissent des mêmes droits au titre des législations respectives en matière de sécurité sociale ou d'assurance sociale;

Décidés à assurer aux travailleurs de chacun des deux pays qui exercent ou ont exercé une activité sur le territoire de l'autre pays, la conservation des droits en matière de sécurité sociale ou d'assurance sociale, acquis ou en voie d'acquisition;

Sont convenus de ce qui suit :

CHAPITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1. Définitions

1. Aux fins d'application de la présente Convention, les termes et expressions ci-après s'entendent comme suit :

- a. Le terme « territoire » se réfère :
 - i. Pour la Grèce : au territoire de la République hellénique;
 - ii. Pour le Venezuela : au territoire de la République du Venezuela.
- b. Le terme « législation » désigne les lois, règlements et autres dispositions cités à l'article 2, qui sont en vigueur sur le territoire de l'une ou l'autre Partie contractante.
- c. L'expression « autorité compétente » désigne, en ce qui concerne la Grèce, le Ministère de la Santé, Prévoyance et Sécurité sociale, ainsi que le Ministère de la Marine marchande pour ce qui est de la sécurité des marins marchands; et en ce qui concerne le Venezuela, le Ministère du Travail.
- d. Le terme « institution » désigne l'organisme ou l'autorité responsable de l'application de la législation visée à l'article 2.
- e. L'expression « institution compétente » désigne l'institution appelée à connaître du dossier, dans chaque cas d'espèce, conformément à la législation applicable.
- f. L'expression « organisme de liaison » désigne l'organisme chargé de la coordination entre les entités chargées de l'application de la Convention et d'informer les intéressés sur les droits et obligations découlant de cette dernière.

- g. Le terme « travailleur » désigne toute personne qui est ou a été assujettie à la législation visée à l'article 2, du fait de l'exercice passé ou présent d'une activité pour compte propre ou pour compte d'autrui.
- h. L'expression « membre de la famille » désigne toute personne définie ou admise comme membre de la famille, ou désignée comme membre de la cellule familiale selon les dispositions de la législation appliquée par l'institution compétente chargée de l'octroi des prestations; toutefois, aux fins de la présente Convention, si cette législation ne considère comme membres de la cellule familiale que les personnes qui vivent sous le même toit que l'assujetti, une telle condition est considérée comme satisfaite dans le cas où ces personnes sont principalement à charge de l'assujetti.
- i. L'expression « période d'assurance » désigne la période de cotisation ou la période assimilée, considérée comme telle par chaque législation.
- j. Le terme « prestations » désigne toute prestation en espèce prévue par les législations visées à l'article 2, y compris tout complément, supplément ou revalorisation.

2. Les autres termes ou expressions non définis par la présente Convention ont le sens que leur attribue la législation applicable.

Article 2. Portée législative

1. La présente Convention s'applique :

a. Au Venezuela :

Aux lois et règlements constituant le régime de sécurité sociale en ce qui concerne les prestations pour :

- a. Incapacité temporaire;
- b. Incapacité partielle ou invalidité;
- c. Vieillesse;
- d. Droits de survivant;
- e. Allocations en cas de décès.

b. En Grèce :

- a. À la législation du régime général couvrant les travailleurs salariés ou assimilés;
- b. À la législation des régimes spéciaux des assurances sociales couvrant toutes les catégories de travailleurs ainsi que les personnes exerçant une activité indépendante ou une profession libérale;
- c. À la législation relative aux agriculteurs et aux marins.

2. La présente Convention ne s'applique pas, pour la Grèce, à la législation spéciale couvrant les pensions des fonctionnaires de l'État.

3. La présente Convention s'applique également aux dispositions légales qui viendraient compléter ou modifier celles visées au paragraphe premier du présent article.

4. La présente Convention s'applique également aux dispositions légales des Parties contractantes qui étendent l'application de la législation en vigueur à de nouvelles

catégories de travailleurs ou qui instituent de nouvelles dispositions en matière d'assurance sociale, sauf si :

- a. Le gouvernement de la Partie contractante qui étend sa législation ou institue de nouvelles dispositions notifie au gouvernement de l'autre Partie son désir d'exclure ces dispositions du champ d'application de la présente Convention, dans un délai de trois mois à partir de la publication officielle desdites dispositions.
- b. Le gouvernement de l'autre Partie contractante notifie au gouvernement de la première Partie son opposition dans un délai de trois mois à partir de la notification officielle de l'extension ou de l'institution.

5. De la même façon, elle s'applique aussi à la législation venant compléter ou modifier les prestations ou régimes visés au paragraphe précédent.

Article 3. Domaine d'application – Personnel

1. Les dispositions de la présente Convention s'appliquent aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation relative à la sécurité sociale ou à l'assurance sociale de l'une ou l'autre des Parties contractantes, ainsi qu'aux membres de leur famille et aux survivants ayant droit à des prestations.

2. Les personnes ayant été soumises à la législation relative à la sécurité sociale ou à l'assurance sociale de l'une des Parties contractantes, et qui résident sur le territoire de l'autre Partie, peuvent s'inscrire à l'assurance du régime facultatif de ce pays aux mêmes conditions que ses ressortissants nationaux, régime pour lequel seront prises en compte, le cas échéant, les périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation de la première Partie.

Si la législation prévoit un délai précis pour demander l'inscription à cette assurance, ce délai sera compté à partir de la date de la dernière cotisation versée à l'une ou l'autre des Parties.

Article 4. Égalité de traitement

Les ressortissants nationaux d'une des Parties contractantes bénéficient de l'égalité de traitement avec ceux de l'autre Partie en ce qui concerne les droits et obligations découlant des législations visées à l'article 2.

Article 5. Législation applicable

Les travailleurs employés sur le territoire de l'une des Parties contractantes sont soumis aux lois et règlements de sécurité sociale de cette Partie.

Article 6. Législation applicable - Exceptions

Les travailleurs suivants sont exclus du champ d'application du précédent article :

- a. Un travailleur offrant une prestation de services sur le territoire de l'une des Parties contractantes pour un employeur y ayant son siège, envoyé sur le terri-

toire de l'autre Partie pour y réaliser une activité temporaire tout en restant soumis à la législation de la première Partie, à condition que la durée de la prestation n'excède pas 12 mois. Si le travail se prolonge au-delà des 12 mois pour des raisons imprévisibles, les autorités compétentes des deux Parties peuvent, d'un commun accord, autoriser une prorogation de cette situation pour une nouvelle période d'un an.

- b. Le personnel naviguant d'entreprises de transport aérien, de navigation ou de pêche maritime reste soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'entreprise a son siège principal.
- c. Les représentants diplomatiques et les fonctionnaires consulaires de carrière sont régis par les dispositions des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et sur les relations consulaires du 24 avril 1963.
- d. Les fonctionnaires publics d'une Partie non visés au paragraphe c du présent article, qui sont envoyés sur le territoire de l'autre Partie restent soumis à la législation de la Partie à laquelle appartient l'administration dont ils relèvent.
- e. Le personnel administratif et technique de l'ambassade et des consulats de l'une des Parties contractantes, les membres de leur personnel de service, ainsi que les personnes qui sont employées exclusivement au service personnel des représentants diplomatiques ou des fonctionnaires consulaires de carrière, quand elles possèdent la nationalité de l'État accréditant, peuvent opter pour l'application de la législation dudit État. Cette option doit être exercée dans les trois premiers mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention ou, le cas échéant, dans les trois mois suivant leur entrée en fonction sur le territoire de la Partie où elles exercent leur activité.
- f. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes peuvent prévoir, d'un commun accord, des exceptions aux dispositions des articles 5 et 6 pour certains travailleurs ou catégories de travailleurs.

Article 7. Prestations de résidents étrangers

1. Les pensions, subventions, rentes ou indemnités acquises en vertu de la législation d'une Partie contractante ne peuvent être réduites, modifiées, suspendues ou retenues au motif que le bénéficiaire réside sur le territoire de l'autre Partie.

2. Les prestations en espèces dues par une des Parties contractantes en application de la présente Convention sont versées aux bénéficiaires qui résident sur le territoire de l'autre Partie ou dans un pays tiers.

CHAPITRE II. PRESTATIONS EN ESPÈCES POUR CAUSE DE MALADIE ET DE MATERNITÉ

Article 8

Les prestations maladie et de maternité en espèces sont à la charge de l'institution compétente de la Partie dont la législation est applicable au travailleur, conformément aux articles 5 et 6 de la présente Convention.

Pour l'octroi desdites prestations, il est tenu compte, le cas échéant, du total des périodes d'assurance sous la forme indiquée à l'article 9, paragraphe premier.

CHAPITRE III. PRESTATIONS POUR INCAPACITÉ PARTIELLE, INVALIDITÉ, VIEILLESSE ET DE SURVIVANT

Article 9. Totalisation

1. Aux fins de l'acquisition, du maintien et du recouvrement des droits aux prestations faisant l'objet du présent chapitre, quand un travailleur a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties contractantes, les périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation de chacune des Parties sont totalisées, le cas échéant, à condition qu'elles ne coïncident pas.

2. Si le travailleur n'a pas droit aux prestations visées au précédent paragraphe, les périodes d'assurance accomplies dans un pays tiers avec lequel les deux Parties contractantes auraient conclu séparément des conventions de sécurité sociale bilatérales ou multilatérales prévoyant la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans ces pays, sont également prises en compte.

Article 10. Régulation des prestations

Le travailleur qui a été successivement ou alternativement soumis à la législation de l'une et de l'autre Partie contractante a droit aux prestations qui font l'objet du présent chapitre dans les conditions suivantes :

1. Lorsque sont remplies les conditions fixées par la législation de l'une ou des deux Parties contractantes pour ouvrir droit aux prestations, l'institution ou les institutions compétentes appliquent leur propre législation interne en tenant uniquement compte des périodes d'assurance accomplies au titre de ladite législation.
2. Lorsque ne sont pas remplies les conditions posées par la législation de l'une ou des deux Parties contractantes pour ouvrir droit aux prestations, l'institution ou les institutions compétentes additionnent avec leurs propres périodes d'assurance celles accomplies en vertu de la législation de l'autre Partie.

Article 11. Qualification des périodes d'assurance

Aux fins de la totalisation prévue dans l'article 10 :

- a. Quand une période d'assurance du régime obligatoire d'une Partie coïncide avec une période d'assurance du régime volontaire de l'autre Partie, il n'est tenu compte que de la période obligatoire.
- b. Quand une même période est considérée simultanément comme une période équivalente par la législation des deux pays, elle n'est prise en compte que par la Partie où l'assujetti a accompli une période obligatoire en dernier, avant la période en question; si l'assujetti n'a accompli de périodes à titre obligatoire anté-

rieurement sur le territoire d'aucune des deux Parties, la période équivalente est considérée par la Partie sur le territoire de laquelle il a accompli postérieurement, et pour la première fois, une période obligatoire.

- c. Les périodes d'assurance accomplies sur le territoire de l'une des Parties, sous un régime en vertu duquel la présente Convention ne s'applique pas, mais qui sont prises en compte dans le cadre d'un régime de cette Partie pour lequel la présente Convention s'applique, doivent être considérées comme des périodes d'assurance par l'autre Partie à des fins de totalisation.

Article 12. Périodes d'assurance accomplies sous régime spécial

Si la législation de l'une des Parties contractantes subordonne l'octroi de prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial, les périodes accomplies en vertu de la législation de l'autre Partie ne sont prises en compte que pour l'octroi de ces prestations, si ces périodes ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession. Si l'assujetti ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, même en cas de totalisation des périodes accomplies au titre de la législation des deux pays, ces périodes seront prises en compte pour l'octroi des prestations conformément aux dispositions du régime général.

Article 13. Conditions plus favorables

Si la législation d'une Partie contractante fixe des conditions plus favorables pour l'octroi d'une prestation à un travailleur qui a exécuté une activité dans des environnements insalubres ou susceptibles d'entraîner une vieillesse prématurée, l'institution de ladite Partie prend en compte les périodes d'assurance portées à son crédit sur le territoire de l'autre Partie durant l'exercice de cette activité, ainsi que les risques indiqués.

Article 14. Périodes d'assurance inférieures à un an

1. Si la durée totale des périodes d'assurance accomplies au titre de la législation d'une Partie contractante n'atteint pas un an et si, en tenant compte uniquement de ces périodes, aucun droit n'est acquis en vertu de sa législation, cette Partie n'est pas tenue d'accorder des prestations à raison desdites périodes. Toutefois, ces périodes sont prises en considération par l'institution de l'autre Partie pour l'acquisition du droit à pension lors de l'application de l'article 10, paragraphe 2.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, quand des périodes d'assurance inférieures à un an ont été accomplies au titre de la législation des deux Parties, ces périodes doivent être totalisées conformément à l'article 10, paragraphe 2, si le total obtenu permet d'acquérir un droit à des prestations en vertu de la législation d'une ou des deux Parties.

Article 15. Liquidation des prestations

1. La Partie contractante ayant procédé à la totalisation des périodes d'assurance, procède à la liquidation des prestations auxquelles l'intéressé a droit en vertu de la législation en vigueur, de la manière suivante :

- a. Elle calcule au préalable le montant théorique de la prestation auquel l'intéressé aurait droit si toutes les périodes d'assurance avaient été accomplies exclusivement en vertu de sa législation applicable;
- b. Elle détermine ensuite la prestation à verser à l'intéressé, en la déduisant du montant théorique calculé conformément aux dispositions du paragraphe 1.a, selon une proportion prenant en compte la durée des périodes d'assurance accomplies en vertu de sa propre législation par rapport à la durée totale des périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation des deux Parties.

2. Quand, en vertu de la législation de l'une des Parties contractantes, le calcul des prestations s'effectue sur base du salaire moyen de toute ou d'une partie de la période d'assurance, ce salaire moyen est déterminé en accord avec les salaires versés pendant la période d'assurance accomplie en vertu de la législation de ladite Partie.

3. Si la somme des prestations à octroyer par les institutions des Parties contractantes est inférieure au montant minimum en vigueur sur le territoire de la Partie où réside l'intéressé, la différence est versée par l'institution de cette dernière Partie.

Article 16. Calcul des prestations

1. Pour déterminer la base de calcul ou la base de règlement de la prestation, chaque institution compétente applique sa propre législation.

2. Quand tout ou partie de la période de cotisation retenue pour le calcul de la base de règlement des prestations a été accompli en Grèce, l'institution vénézuélienne compétente détermine la pension en considérant que pendant cette période, les cotisations ont été versées en fonction du salaire minimum en vigueur au Venezuela, pour peu que ledit salaire minimum soit inférieur au salaire maximum de cotisation.

CHAPITRE IV. ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

Article 17. Législation applicable

1. Le droit à des prestations au titre d'accidents du travail ou de maladies professionnelles est régi par la législation de la Partie contractante à laquelle le travailleur est assujéti à la date à laquelle se produit l'accident ou se déclare la maladie, à moins que cette dernière n'ait été contractée sur le territoire de l'autre Partie; dans ce cas, la prestation est à la charge de cette dernière, conformément à sa législation.

2. Si l'intéressé n'a pas droit à des prestations pour maladie professionnelle en vertu de la législation de la Partie visée au paragraphe précédent, l'autre Partie examine ses

droits, conformément à sa législation, à condition qu'il ait exercé une activité susceptible de provoquer la maladie en cause, sous couvert de sa législation.

3. Quand, en vertu de la législation de l'une des Parties, les prestations pour maladie professionnelle ne sont accordées que si la maladie en cause a été constatée pour la première fois sur le territoire de cette Partie, cette condition est réputée remplie quand la maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l'autre Partie.

Article 18. Évaluation des accidents antérieurs

Si un travailleur qui a subi un accident de travail ou une maladie professionnelle pour lesquels est appliquée la législation d'une des Parties contractantes, est ultérieurement victime d'un autre accident de travail ou maladie professionnelle pour lesquels est applicable la législation de l'autre Partie contractante, l'institution compétente de cette dernière prend en compte, pour déterminer le degré d'incapacité dudit travailleur, le premier incident comme s'il avait eu lieu en vertu de sa législation, mais n'assume que le paiement correspondant à l'incapacité découlant du deuxième incident.

Article 19. Aggravation de la maladie

En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle qui a donné lieu au versement d'une pension en vertu de la législation de l'une des Parties contractantes, les règles suivantes sont applicables lorsque le bénéficiaire réside sur le territoire de l'autre Partie :

- A. Si le travailleur n'a pas exercé au lieu de sa nouvelle résidence une activité susceptible d'aggraver cette maladie, l'institution de la première Partie prend à sa charge l'aggravation conformément aux dispositions de sa propre législation.
- B. Si le travailleur a exercé au lieu de sa nouvelle résidence une activité susceptible d'aggraver la maladie considérée :
 - a. L'institution de la première Partie continue à prendre en charge la prestation due au travailleur en vertu de sa propre législation, comme s'il n'y avait pas eu aggravation de la maladie.
 - b. L'institution de l'autre Partie sur le territoire de laquelle le travailleur a exercé en dernier lieu l'activité en cause prend à sa charge la prestation correspondant à l'aggravation de la maladie. Le montant en est calculé conformément à la législation de cette Partie, comme si la maladie s'était produite sur son territoire, et il est égal à la différence entre le montant dû après l'aggravation et celui qu'il aurait été avant qu'elle ne se produise.

CHAPITRE V. ALLOCATION POUR OBSÈQUES OU PRESTATION POUR CAUSE DE DÉCÈS

Article 20. Législation applicable - Totalisation

1. Les allocations pour obsèques ou prestations pour cause de décès sont régies par la législation qui était applicable au travailleur à la date du décès.

La reconnaissance du droit à la prestation et le calcul de cette dernière s'effectuent en totalisant, si besoin est, les périodes d'assurance accomplies par la personne au titre de laquelle la prestation est due sous la législation de l'autre Partie, conformément à l'article 9, paragraphe premier.

2. Dans le cas du décès d'un pensionné des deux Parties contractantes, la reconnaissance du droit à prestation pour cause de décès est régie par la législation de la Partie sur le territoire de laquelle le pensionné résidait au moment du décès.

3. Si le décès du pensionné s'est produit dans un pays tiers et que le droit à prestation existe dans les deux Parties contractantes, la législation applicable est celle de la Partie sur le territoire de laquelle le travailleur défunt a été assuré pour la dernière fois.

CHAPITRE VI. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 21. Conditions

Lorsqu'aux termes de la législation de l'une des Parties contractantes, la jouissance d'une prestation de la sécurité sociale ou de l'assurance sociale, l'obtention de revenus d'une autre nature, ou l'exercice d'une activité lucrative ont des incidences juridiques sur le droit à une prestation ou sur l'affiliation au régime de sécurité sociale ou à l'assurance sociale, ces situations ont de telles incidences même si elles se produisent ou se sont produites sur le territoire de l'autre Partie.

Article 22. Revalorisation des prestations

Les prestations reconnues par application des règles du chapitre III sont revalorisées selon la même périodicité et pour des montants identiques que celles prévues dans la législation interne de chacune des Parties.

Toutefois, quand le montant d'une pension a été déterminé selon le régime du prorata prévu au paragraphe premier de l'article 15, le montant de la revalorisation est calculé en appliquant la règle de proportionnalité citée auxdits paragraphe et article.

Article 23. Traitement des pièces

Les demandes, déclarations, recours et autres pièces qui doivent être présentés dans un délai déterminé aux autorités compétentes et institutions d'une Partie contractante, ont la même valeur lorsqu'ils sont présentés dans le même délai aux autorités compétentes et aux institutions de l'autre Partie.

Les règles relatives à la présentation des pièces sont fixées dans l'accord administratif visé à l'article 27.

Article 24. Bénéfices des droits, légalisation et traduction de documents

1. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbre, de droits d'enregistrement ou de greffe ou d'autres droits analogues prévus par la législation de

l'une des Parties contractantes pour les certificats et pièces à produire aux fins d'application de la législation de ladite Partie est étendu aux pièces et certificats à produire pour l'application de la législation de l'autre Partie ou de la présente Convention.

2. Tous actes administratifs et pièces à produire pour l'application de la présente Convention sont dispensés des exigences de légalisation et de visa, mais seront traduits par des interprètes publics lorsque l'une des Parties le juge nécessaire.

Article 25. Paiement de prestations en monnaie nationale

Les institutions redevables de prestations sont libérées de toute obligation quand elles effectuent le paiement dans la monnaie de leur pays.

Article 26. Bons offices et collaboration

Les autorités compétentes et institutions des deux Parties se prêtent leurs bons offices et la plus ample collaboration technique et administrative pour l'application de la présente Convention dans le cadre de leur propre législation.

Article 27. Accords administratifs

Les autorités compétentes et institutions des deux Parties élaborent conjointement des accords administratifs aux fins d'application et d'exécution de la présente Convention.

Article 28. Mesures d'exécution de la Convention

Les autorités compétentes des deux Parties s'engagent à prendre les mesures suivantes pour la bonne exécution de la présente Convention :

- a. Désigner les organismes de liaison.
- b. Se communiquer les mesures adoptées sur le plan interne aux fins d'application de la présente Convention.
- c. Se notifier toutes les dispositions législatives et réglementaires modifiant celles visées à l'article 2.

Article 29. Communication directe

Pour assurer l'application et la mise en oeuvre convenable de la présente Convention, les autorités compétentes, organismes de liaison et institutions des deux Parties communiquent directement.

Article 30. Résolution des différends

Les divergences qui pourraient se produire au sujet de l'interprétation et de l'application de la présente Convention seront résolues autant que possible par les autori-

tés compétentes des deux Parties. Les différends qui pourraient subsister seront réglés par la voie diplomatique.

CHAPITRE VII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 31. Périodes et droits antérieurs

1. Les périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation des Parties contractantes avant l'entrée en vigueur de la présente Convention sont prises en compte pour déterminer le droit à des prestations reconnues, dues en vertu de la présente Convention. L'institution du Venezuela ne reconnaîtra néanmoins pas les périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1967.

2. L'application de la présente Convention ouvre droit à des prestations pour des faits survenus avant la date de son entrée en vigueur. Ces prestations ne seront toutefois pas réglées avec effet rétroactif à compter de cette date.

Article 32. Chevauchement de périodes antérieures

Nonobstant les dispositions du chapitre III de la présente Convention, lorsque des périodes d'assurance accomplies avant l'entrée en vigueur de la Convention sur le territoire des deux Parties contractantes viennent à coïncider, chaque Partie prend en compte les périodes pour lesquelles une cotisation a été versée conformément à sa législation, aux fins d'application de l'article 10.

Article 33. Révision des demandes antérieures

1. Les demandes de prestation qui ont été examinées par chacune des Parties avant l'entrée en vigueur de la Convention peuvent être revues à la demande des intéressés à la lumière de ses dispositions.

2. Lorsqu'une prestation ou demande de prestation a été suspendue dans son application ou rejetée en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé, ou à cause du non-respect des conditions exigées par les législations internes des deux Parties contractantes, l'intéressé peut demander une reconsidération de son cas, et cette demande de reconsidération est décidée au cas par cas.

3. Dans les cas mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les prestations sont liquidées à partir de la date de présentation de la demande. Dans le cas où la demande est présentée dans un délai d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention, les prestations sont liquidées à partir de cette date.

Article 34. Entrée en vigueur

L'entrée en vigueur de la présente Convention est subordonnée à l'accomplissement des formalités constitutionnelles de chacune des Parties. À cette fin, chacune communiquera à l'autre que les formalités exigées dans son pays ont été remplies.

La Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière de ces communications.

Article 35. Durée

1. La présente Convention est conclue pour un an à partir de la date de son entrée en vigueur et elle est prorogée automatiquement d'année en année, sauf dénonciation notifiée six mois avant l'expiration de sa durée de validité.

2. Au cas où la Convention cesserait de produire ses effets, ses dispositions continueraient à s'appliquer aux droits acquis en vertu de ses dispositions.

Dans ce cas, les Parties contractantes conviendront également de dispositions de nature à garantir les droits en cours d'acquisition nés des périodes d'assurance accomplies avant que la Convention ne cesse de produire ses effets.

En foi de quoi, les soussignés, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés, ont signé la présente Convention.

Fait à Caracas, le vingt-quatrième jour du mois d'avril de l'an mille neuf cent quatre-vingt-onze, en deux exemplaires en castillan et en grec, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République du Venezuela :

GERMAN LAIRET URGUELLES

Ministre du Travail

Pour le Gouvernement de la République hellénique :

CHARALAMBOS PAPADOPOULOS

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire